

A qué le juegan?

Es francamente desconcertante la posición, o la falta de ella, de buena parte de los "dirigentes" de diversos sectores de la sociedad con respecto al manejo institucional del tema del orden público. Y lo es más, porque precisamente son los líderes políticos, gremiales, sindicalistas y en fin, todos los que supuestamente defienden la institucionalidad, quienes tienen la inmensa responsabilidad de orientar, de dar claridad, de liderar y de dirigir.

Al margen del torpe desconocimiento de la diferencia conceptual y de legitimidad entre paramilitares y autodefensas, es evidente que si se rechaza la participación de la población en el conflicto irregular que nos agobia [por convicción, por respeto a los derechos humanos, por presión internacional, por conveniencia, por lo que sea] ineludiblemente se debe apoyar y fortalecer a las Fuerzas Armadas. Y ello es así porque el fenómeno de las autodefensas se origina en la incapacidad institucional del Estado de garantizar el imperio de la ley, de la tranquilidad, del orden, de la justicia, de la libertad y de la equidad social.

Ciertos "defensores de la institucionalidad" argumentan la vigencia del debate sobre la eficiencia, modernización y comportamiento de las Fuerzas Armadas para justificar su posición. Aceptado el punto. Pero una cosa es la crítica constructiva y otra muy distinta es aprovechar estos argumentos para mimetizar el desprecio, hostilidad y desgano para con todo lo militar. Y esto sí causa un grave daño institucional y desorientación de la opinión pública. A la mayoría de los detractores de los paramilitares no se les capta un compromiso con las Fuerzas Armadas.

Es que las cosas son, o debían ser, muy claras y sencillas. O se apoya la institucionalidad o se contribuye a desestabilizarla. Y es que esta disyuntiva no la desvirtúa ni la aplastante realidad de las desigualdades sociales, que aunque existan, no le restan legitimidad a las instituciones. El actual Gobierno no ha hecho valer la abrumadora participación electoral sin antecedentes históricos en Colombia, la que deja sin piso el viejo argumento de la ilegitimidad de nuestras instituciones.

O la guerrilla es sincera en su reivindicación de las desigualdades sociales o no lo es. Cada quien tiene sus opiniones, las cuales han venido siendo reafirmadas o desvirtuadas con el correr del tiempo. Ante la duda, bien fundada por cierto, sobre la sinceridad de la guerrilla, tener un plan de contingencia no es una simple opción. Es una obligación para con la sociedad. Y aún si la guerrilla es sincera, qué garantías hay de una salida negociada exitosa? Desde cuándo las buenas intenciones garantizan los resultados? Aún en la eventual de la sinceridad guerrillera, las dificultades para compatibilizar las doctrinas marxistas-leninistas con una democracia capitalista de libre mercado son inconmensurables, por no decir que estas son excluyentes.

Que hay que intentarlo? Desde luego. Pero, y si fracasamos, nuestra explicación para encontrarnos en tan inconveniente posición será el invocar nuestras buenas intenciones?

Estos interrogantes y realidades nos plantean la conveniencia y la obligación de contemplar planes de contingencia institucionales efectivos. Lo contrario es un salto al vacío o una tácita rendición.

Qué hay detrás de esto? Mezquindad? Torpeza? Cobardía? Ligereza? Equivocación? Y, a quién le conviene esa confusión?

Es que creen que esa indefinición les permitirá conservar sus actuales posiciones de privilegio ante la posibilidad de un triunfo guerrillero?.

A qué le juegan?

What are they playing at?

The position, or the lack of it, of most "leaders" of various sectors of our society regarding the institutional management of public order issues is certainly baffling. Even more so if we bear in mind that political, trade, union and other leaders, who are supposed to defend our institutions, should provide orientation, transparency, and leadership.

Apart from the foolish ignorance on the difference between paramilitary and self-defense groups, in terms of concept and legitimacy, it is evident that if the population is not allowed to participate in this irregular conflict (on the basis of conviction, respect for human rights, convenience, international pressure, or whatever reason) we must certainly support and strengthen the Armed Forces. The phenomenon of self-defense groups results from the institutional incompetence of the Government in terms of ensuring the rule of law, order, justice, freedom, and social balance.

Some "advocates of institutions" justify their stand by arguing that the debate on the efficiency, modernization, and behaviour of the Armed Forces is still in force. They have a point. But a positive critique differs from using the above mentioned arguments to hide contempt, hostility, and reluctance towards anything related to the military. This causes serious institutional damage and certainly misleads public opinion. Most detractors of the paramilitary are not committed to the Armed Forces.

The options are or should be clear and simple. You either support institutions or contribute to their destabilization. Not even the evident reality of inequitable social conditions undermines this choice. Social unbalance does not diminish the legitimacy of our institutions. The present administration has not lived up to the overwhelming and historically unprecedented participation during the elections, which invalidates the old argument on the lack of legitimacy of our institutions.

The guerrillas' purpose of recovering social equality may or may not be honest. You are entitled to your own opinion, which will be confirmed or disproved with time. In view of the well-founded doubts on the sincerity of the guerrillas, a contingency plan is not just an alternative, but an obligation towards society. Even if the guerrillas are sincere, can a successful negotiated settlement be guaranteed? Does good will ensure results? Assuming that the guerrillas are acting in good faith, it would be difficult to harmonize a marxist-leninist doctrine with a capitalist free market democracy. These principles could even be self-defeating.

Must we try? Absolutely. However, will we invoke good will as an explanation for this unpleasant standing in the event of failure?

These questions suggest the need for and the obligation of having an effective institutional contingency plan. Otherwise, we would be jumping into an abyss or tacitly surrendering.

What is there behind all this? Pettinness? Foolishness? Cowardice? Lightness? Errors? Who benefits from this confusión?

Do they believe that this lack of definition will allow them to remain in their present privileged positions in the event of a guerrilla victory ?

What are they playing at?